

**América Latina y el Caribe ante una
encrucijada clave: La integración regional
como respuesta a la crisis de la COVID-19**

Resumen ejecutivo

La grave crisis de la COVID-19 ha golpeado fuertemente a la región. América Latina y el Caribe han visto como sus sistemas sanitarios, económicos e institucionales se han debilitado y también colapsado. La mala gestión, las condiciones pre-existentes y la falta de confianza de la gente en sus gobernantes, han sido factores que contribuyeron a profundizar el escenario de catástrofe. En el presente ensayo se propone intentar superar esta crisis, a través de un principio de coordinación y solidaridad interregional, que permita fortalecer al continente, no sólo frente a la pandemia imperante, sino que también hacia los problemas del futuro.

La puesta en exposición de diversas alternativas tienen como único factor común la cooperación entre países, siendo esta la única vía para posicionar a América Latina y el Caribe como un bloque que camine hacia el desarrollo y la seguridad, dando una imagen de progreso frente a otras economías.

Introducción

La humanidad ha acumulado un extenso historial de enfermedades que han puesto en tela de juicio su supervivencia. La última de estas pandemias fue declarada oficialmente al día 11 de marzo del 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Paz-Noguera, 2020), siendo una crisis que se ha extendido y que definitivamente se mantendrá durante varios años más. A la fecha se han reportado aproximadamente 168 millones de casos y más de 3 millones de muertos alrededor del mundo (Universidad Johns Hopkins, 2021); a pesar del proceso de vacunación iniciado hace pocos meses, el cual todavía no entrega certezas de una fecha de término del Covid-19.

En el caso de nuestra región, la crisis ha golpeado de manera fuerte y profunda. América Latina y el Caribe registraron el 25% del total de fallecimientos debido a la Covid-19, a pesar de tener sólo el 8% de la población mundial. Asimismo, la caída de 7,4% del PIB registrada en 2020, fue la mas grande en un solo año para la región desde 1821 (BID, 2021). Esto marca que la pandemia ha significado dificultades para los distintos países del continente, quienes ya arrastran grandes problemas de base. Uno de esos es la pobreza, la cual con la crisis sanitaria recrudesció a tal punto que proyecciones auguran un aumento del 12,1% al 14,6% de la pobreza extrema, mientras que se espera que la pobreza moderada aumente del 11,7% al 14,6% (BID, 2021). El reciente informe macroeconómico para América Latina y el Caribe, **“Oportunidades para un mayor crecimiento sostenible tras la pandemia”** identifica que la pandemia provocó en la región una *“triple parada súbita”*, con grandes perturbaciones en la movilidad humana, el comercio y los flujos de capital (BID, 2021).

Lo anteriormente descrito no es algo sorprendente, tomando en cuenta el escenario de vulnerabilidad que presentaba América Latina y el Caribe pre-Covid; sumado a que la gestión pública mundial tampoco estaba preparada para enfrentar esta crisis y todo se hizo sobre la marcha. Los países de la región partieron con desventajas adicionales, debido a su bajo crecimiento económico los últimos años, sus débiles

sistemas sanitarios y una política fiscal con menor capacidad expansiva (Paz-Noguera, 2020). Esta crisis comenzó a desplegarse con fuerza cuando estas naciones ya se enfrentaban a un complejo conjunto de condiciones preexistentes, entre las cuales estaban los bajos niveles de productividad y un malestar social latente (BID, 2021); malestar social que se evidenció antes y durante la pandemia.

En el Informe especial de la CEPAL, **“Pactos políticos y sociales para la igualdad y el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe para la recuperación pos-Covid19”**, se identifican factores que han hecho a la región particularmente vulnerable, los cuales se resumen en un elevado nivel de informalidad laboral, la mencionada baja productividad, la urbanización precaria, el ya visto alto grado de pobreza y desigualdad, y la gran disparidad de género, sumado al hecho de sistemas de salud y protección social frágiles y fragmentados (CEPAL, 2020). Bajo esta línea, en este ensayo se propone una base para avanzar en un pacto regional, que signifique integración y preparación para afrontar, no solamente esta pandemia, sino también futuras crisis sanitarias, económicas y desastres naturales, estos últimos con especial atención debido al cambio climático.

Para guiar lo esperado en este documento, los puntos a tratar y en función de la necesidad de abordar la integración regional, es que se toma como foco de referencia el diagnóstico hecho por el Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En **“Riesgo político América Latina”** se destaca que América Latina enfrenta un *“triple shock”*: sanitario, económico e institucional, con un estancamiento económico en los últimos 6 años, la pandemia del Covid-19 y los bajos niveles de confianza en las instituciones que amenazan con una nueva década perdida para la región (Sahd, Rojas, & Fernandez, 2021). Estas dimensiones mencionadas son claves en el desarrollo de cualquier Estado; son elementos a observar e intervenir a la hora de hablar de temas atinentes en la agenda regional. Tanto la crisis sanitaria, económica e institucional son tópicos que han atravesado los gobiernos latinoamericanos y del Caribe estos últimos meses, es por eso mismo que se pretende ofrecer una puerta de entrada para analizar el

cómo se podrían congeniar posturas y puntos en común para avanzar en el mejoramiento de estos aspectos. Las problemáticas tienden a ser similares, a pesar de algunas diferencias, las soluciones también se sugieren parecidas y vendrían a ser mucho más fáciles de conseguir con un apoyo interregional, no solamente por un principio de solidaridad, sino por la necesidad de estababilizar a la región y así presentarla como un foco confiable, de desarrollo y con perspectiva de futuro frente al mundo.

La crisis económica en la región ha sido de grandes magnitudes. Países como Venezuela, Argentina o El Salvador que ya exhibían una alta deuda fiscal que superaba el 65%, previo a la crisis, se encuentran con un contexto en donde la capacidad financiera del Estado se vera más restringida aún luego de los planes de rescate frente a la Covid-19 (Sahd, Rojas, & Fernandez, 2021). A nivel ocupacional nuestro continente presenta múltiples obstáculos que le impiden enfrentar los efectos de la pandemia. Gran parte de la población vive en la informalidad, teniendo la mayoría un nulo acceso a la seguridad social (CEPAL, 2020); basta ver los números que representan la gran proporción de empleos informales, siendo aproximadamente un 53,1% en 2016 (OIT, 2018). Ahondando un poco más, si bien la crisis afecta a toda la fuerza de trabajo, la situación de estas personas bajo la informalidad, especialmente las mujeres, jóvenes indígenas, afrodescendientes y migrantes, constituye un fuerte núcleo de vulnerabilidad (CEPAL, 2020b) que tiene que ser puesto en discusión a la hora de elaborar los planes de intervención. Esta multidimensionalidad de la crisis económica trae consigo la necesidad de fortalecer lazos entre los países, que permitan llevar a cabo políticas de impulso e incentivo, las cuales se reflejen en proyectos interregionales e inversiones que entreguen mejor posición frente al mercado internacional. En ese sentido, el compromiso de muchas trasnacionales que funcionan a nivel latinoamericano, la coordinación con el Estado y el espacio para órganos de la sociedad civil, son aspectos fundamentales para generar programas que realmente aseguren estabilidad en el largo plazo, que promuevan la formalidad laboral y que con ello se constituya un marco de respeto también a los derechos laborales.

A nivel institucional la gobernabilidad de muchos países del continente se ha visto trastocada, antes y durante la pandemia, siendo este un factor negativo al momento de administrar. Basta ver la situación chilena durante finales del año 2019, que trajo consigo un alto nivel de deslegitimidad del aparato político; aquello se agravó con la pandemia que, sumado a una muy mala gestión, profundizó la crisis sanitaria. Así también el reciente estallido colombiano, que debe su origen a una seguidilla de malas decisiones económicas y que fue profundizada por un repudiable actuar en materia de derechos humanos por parte del gobierno.

La pandemia a puesto en tensión la arena política, el espacio en que los distintos programas y proyectos se llevan a cabo, donde se encuentran e interactúan los diversos actores de la vida en comunidad y las organizaciones políticas y sociales que sustentan las acciones (CEPAL, 2020). Es imperativo que los diversos Estados cambien el foco administrativo y, en el marco de la toma de decisiones, haya un cierto límite ante el actuar de algunos presidentes que, no solamente han caído en decisiones directamente antidemocráticas, sino que han sido fiel reflejo de un fuerte período de deslegitimación, que conlleva una separación con actores de la sociedad civil. Aquello último, no es algo menor a nivel regional, ya que trae consigo eventos que devienen en una inestabilidad que daña intereses y proyecciones de desarrollo. Los gobiernos de la región se están viendo obligados a actuar a través de una compleja red de toma de decisiones (CEPAL, 2020).

Lo sanitario es la dimensión por excelencia, la crisis ha traído como consecuencia dejar aún mas expuestos los débiles sistemas de salud de la región, unos peores que otros. El problema esencial en América Latina fue que este mismo sistema sanitario no estaba preparado para atender una gran cantidad de personas contagiadas, derivando en un colapso rápido (Paz-Noguera, 2020). En ese sentido, la Covid-19 significó daños profundos en la salud de la población debido a su letalidad, convirtiéndose en una demanda que pedía la intervención gubernamental para afrontar de mejor manera la emergencia (Paz-Noguera, 2020).

Para la CEPAL, la crisis exige una reacción rápida y eficiente en donde se puedan atender las diversas realidades nacionales y se tomen decisiones basadas en el conocimiento científico, que sean consideradas por la misma ciudadanía como las mejores alternativas de política pública (2020). Respecto a lo anterior, hemos visto variados problemas en las distintas naciones, que van desde escasez de oxígeno, colapso en la atención primaria, falta de respiradores o falta de camas críticas. Es imperativo plantear una base para la intervención a nivel interregional, ya que solo superando los riesgos sanitarios en conjunto se podrá estabilizar el escenario; para ello, no solamente hace falta una mayor cooperación en insumos o vacunas, sino que también en la elaboración de planes de reacción comunes, con estándares que permitan responder de forma coordinada a este tipo de desastres.

Si algo tiene que quedar claro en la introducción de este ensayo, es que la pandemia del coronavirus no ha diferenciado fronteras (Sahd, Rojas, & Fernandez, 2021), ya que desde los países más prosperos hasta los menos desarrollados han enfrentado desafíos. Esto no fue excepción en estas tierras, la profundización de los procesos de integración regional en América Latina antes del Covid-19, ya venían mostrando claros signos de desaceleración y este nuevo escenario de incertidumbre es una prueba de cooperación regional (Sahd, Rojas, & Fernandez, 2021). En esa línea, la idea es que posterior a esta crisis los sistemas sanitarios se vean favorecidos, las economías se encuentren con un campo fértil y que las instituciones, tan vapuleadas los últimos años, construyan espacios de diálogo y conexión con la sociedad civil.

El cuerpo del documento se dividirá en tres partes de desarrollo, lo primero será abordar la integración desde la perspectiva económica, desglosando la situación actual y apuntando a diversas soluciones que han surgido los últimos meses, teniendo siempre como foco la cooperación interregional; posteriormente se abordará lo institucional, tocando diversos obstáculos que se han presentado para el fortalecimiento de la democracia en América Latina, lo cual trae consigo un desafío de respeto a los derechos humanos y recuperación de legitimidad ante las

bases populares; y finalmente, la terrible crisis en salud, la cual será descrita a modo general y profundizada en alguna de sus aristas, terminando con puntos en común y acuerdos que se han encontrado durante la pandemia y que invitan nuevamente a conjugar esfuerzos a nivel continental.

El desafío Económico

Se estima que entre febrero y octubre de 2020 se perdió un total del 10% de los empleos en la región, que disminuyó posteriormente al 7% en febrero de 2021, a medida que la actividad económica comenzaba a recuperarse; aquello significa una pérdida aproximada de 26 millones de empleos en 12 países en el período inicial (BID, 2021). A pesar de algunas iniciativas de incentivo monetario, las cifras son elocuentes a la hora de pensar en un mayor esfuerzo para aplacar el desastre económico. Los aparatos fiscales se han visto tremendamente afectados en esta parte del mundo, de hecho, se estima que la deuda pública aumentó del 58% del PIB en 2019 al 72% en 2020; sobre todo en países dependientes del turismo, quienes debido a su exposición evidente han sido el símbolo de esta crisis internacional (BID, 2021).

En el plano específico de las ayudas, han existido diversos paquetes por parte de distintas organizaciones financieras. El Mercosur, por ejemplo, creó un fondo especial de US\$16 millones para testeos de países miembros, el Plan de Contingencia Regional del Sistema Integrado Centroamericano (SICA) para atender las consecuencias económicas y sanitarias de la pandemia o apoyos de liquidez como los entregados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (BID, 2021), sumado a las inyecciones de los distintos países de la región en cada una de sus economías. Según el informe macroeconómico del Banco Interamericano de Desarrollo el esfuerzo fiscal ha llegado aproximadamente a un total de USD 485.000 millones (BID, 2021). Sin embargo, en comparación a países desarrollados, el porcentaje de inversión llevado a cabo por los Estados latinoamericanos y caribeños ha sido insuficiente; cuestión lógica si metemos en la ecuación los inestables escenarios financieros y los problemas de base que arrastran la mayoría de las

naciones del continente. Algo que grafica fielmente lo anteriormente destacado, es que el paquete promedio de los países, incluyendo medidas presupuestarias y extra presupuestarias, fue de 8,5% del PIB, a diferencia de las economías avanzadas que implementaron paquetes cercanos al 19% del PIB (BID, 2021).

Los niveles de informalidad, la capacidad del sistema sanitario, la efectividad de las intervenciones no farmacéuticas y la capacidad limitada de teletrabajo pueden formar parte de la explicación de este bajo crecimiento y alto número de fallecimientos en la región (BID, 2021), a los cuales pueden sumarse otros elementos pertinentes a cada realidad nacional. Otro tipo de vulnerabilidad pre existente, son las ocurridas con los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), que están muy endeudados, siendo muy vulnerables al cambio climático, teniendo economías frágiles que dependen principalmente del turismo y cuentan con acceso limitado al financiamiento debido a su clasificación como países de renta media (CEPAL, 2020). Ahondando en las dinámicas locales, encontramos muchos más obstáculos; estos servicios han debido afrontar desafíos como la escasez de mano de obra, presiones adicionales sobre la salud y asistencia social, dificultades financieras y repercusiones económicas en las empresas y los empleadores locales, entre otros (CEPAL, 2020). La singularidad de esta crisis es que para desacelerar la propagación del virus, los gobiernos se vieron obligados a restringir la movilidad de las personas y cerrar deliberadamente grandes sectores de la economía, colapsando el comercio, secando los flujos de capital y hundiendo los precios de las materias primas (BID, 2021).

Fórmulas especiales para poder superar este momento no hay; sin embargo, podemos encontrar en diversos documentos publicados propuestas que se posicionan como alternativas viables. Una destacable es la idea de que los gobiernos implementen políticas mucho más inclusivas, con un aumento en los impuestos que permita mejorar la distribución del ingreso a través de redes de protección social y una prestación más efectiva de servicios públicos, como la educación y la atención sanitaria (BID, 2021). Siempre con un principio de

estabilidad financiera, ya que es necesaria para que los mismos bancos jueguen un rol constructivo, proporcionando créditos a empresas que favorezcan una recuperación saludable y sostenible (BID, 2021).

Las distintas medidas abordadas podrían también subsanar problemas de base que se arrastran y que han contribuido a agrandar la crisis. Reducir la informalidad generalizada, por dar una opción, sería un paso importante para aumentar la base tributaria del impuesto y al mismo tiempo permitiría establecer las reglas del juego equitativas para que las medianas y pequeñas empresas puedan prosperar (BID, 2021); sumado a la posibilidad de entregar protección social regulada. Hay que estar preparados para los futuros obstáculos que se presentarán, en donde se pronostica una nueva ola migratoria post-Covid, especialmente en países cuya caída será profunda por los altos grados de informalidad en su mercado laboral, planteando un riesgo político para los gobernantes y actores de la sociedad (Sahd, Rojas, & Fernandez, 2021).

Para lograr este tipo de objetivos se necesita el fortalecimiento de los diversos actores claves al momento de construir propuestas. El Estado, como garante, debe reforzar su alianza con el sector privado, así como fomentar el respeto de estos mismos por los derechos humanos (ACNUDH, 2011). Para instituciones como la CEPAL, la alianza debe ser íntegramente triple, entre los Gobiernos, el sector privado y la sociedad civil de los países de la región; pacto que debiese construirse sobre la visión compartida y objetivos comunes en lo social, fiscal, productivo y de sostenibilidad ambiental (2020).

Es imperativo plantear como principio la solidaridad interregional. Una de las lecciones de las crisis anteriores, es que éste no es el momento de replegarse sobre sí y levantar barreras; todo lo contrario, la región debe buscar una mayor integración mediante tratados comerciales más sólidos y la eliminación de obstáculos que perjudiquen el libre flujo de bienes y servicios (BID, 2021). Para poder superar realmente estas brechas y la desigualdad, es necesario superar la huella social del

modelo actual de desarrollo, apostando regionalmente a un desarrollo social inclusivo, con enfoque de derechos y de universalismo sensible a las diferencias (CEPAL, 2019).

Este punto tocado anteriormente, es el eje del ensayo. La necesidad de repensar el surgimiento pos-Covid como un desafío a nivel regional y no solamente nacional, el repensar las propuestas de impulso económico en función de una proyección que permita posicionar a América Latina como un campo fértil para el progreso. Un mercado integrado de 650 millones de habitantes constituye un importante seguro frente a las perturbaciones que aparecen fuera de él y, a la vez, abre la posibilidad de alcanzar la escala necesaria para viabilizar nuevas industrias y promover redes de producción e investigación tecnológicas compartidas (CEPAL, 2020). La solidaridad y la integración son herramientas que serán fundamentales en el inmediato, ya que hay riesgos importantes de rebrotes que amenazan constantemente con volver, una y otra vez, a adoptar medidas restrictivas que tendrían un impacto negativo en la actividad económica (BID, 2021). Aquello solo confirma lo necesario que es la colaboración de los múltiples actores involucrados, solamente esto permitiría combatir con éxito la pandemia, lidiar con los efectos sociales y económicos a corto, mediano y largo plazo (CEPAL, 2020). La cooperación y el intercambio de prácticas exitosas entre países vecinos, son elementos que lograrían aplacar nuestra desventaja de base.

El desafío Institucional

Queda totalmente claro que la pandemia del Covid-19 es un problema público de propiedad, según Paz-Noguera, es un problema con intensidad (provoca graves perjuicios), con alcance (altamente contagioso), novedoso (enfermedad con poca información anterior) y urgente (alto nivel de prioridad mundial) (2020). Al difícil cuadro económico se suma la crisis de gobernabilidad, con una relación tirante, por ejemplo, entre Ejecutivo y Legislativo, un deterioro en el proceso de elaboración de políticas públicas y un desprecio por la evidencia técnica (Sahd, Rojas, &

Fernandez, 2021). El problema es universal, afecta todas las áreas de nuestra existencia.

La mayoría de los países analizados optó por medidas no farmacéuticas en forma de confinamiento; en este sentido, son altamente demandantes los recursos de autoridad y organización del Estado, porque su implementación requiere fuertes legislaciones, sanciones y cuerpos policiales (Paz-Noguera, 2020). Mismas acciones que han sido un ejemplo de la existencia de poca confianza de estos mismos gobiernos en sus capacidades para localizar y controlar el virus (Paz-Noguera, 2020), ya que las decisiones fueron muy rápidas y dejaron de lado otro tipo de medidas que podrían haber sido un mejor complemento al combate sanitario (mayor capacidad de testeo, seguimiento de casos, promoción de información de prevención, etc.). Para la CEPAL el desempeño de las autoridades en el marco de esta crisis es fundamental, para avanzar hacia caminos institucionales que desplacen el escenario político hacia una mayor inclusión social, y para no profundizar las distancias que separan a los ciudadanos entre sí, y a estos del Estado (2020). El por qué de aquello es debido a que han existido casos a través de América Latina y el Caribe, en donde en medio de la pandemia han ocurrido graves estallidos sociales y uso excesivo de la fuerza, por parte de agentes del Estado, que han socavado la confianza mencionada entre la ciudadanía y sus gobernantes. Con el pasar de los meses, se han cuestionado algunas respuestas institucionales a la crisis en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos (CIDH, 2020; ACNUDH, 2020), mostrando preocupación por la posibilidad de que estas medidas adoptadas en la emergencia se transformen en permanentes, bajo el nombre de *“nueva normalidad”*, o de que sirvan para que ciertos grupos políticos y sociales acumulen poder en perjuicio de otros (CEPAL, 2020).

En relación a este tipo de imposiciones gubernamentales, las cuales han generado graves problemas y cuestionamientos debido a su ejecución y duración, también se posicionan las dificultades con los instrumentos de información incorporados por parte del Estado, los cuales son *“unidireccionales”*, limitándose a generar

información desde el gobierno a los ciudadanos (Paz-Noguera, 2020). En América Latina, existen denuncias sobre la restricción al acceso público de la información sobre la pandemia, demora en las respuestas a solicitudes de información y modificaciones en los procesos para acceder a ella (La liga contra el Silencio, 2020). Es fundamental que la autoridad sea capaz de escuchar a los ciudadanos, de modificar la trayectoria si se diera el caso, y de abrir espacios que supongan un mejor uso de, por ejemplo, las tecnologías digitales para facilitar la participación de la sociedad civil; dicha participación debe traducirse en la estructuración de acciones coordinadas en el ámbito local, nacional y regional, que sean precisas en cuanto a los tiempos y oportunas respecto a la toma de decisiones (CEPAL, 2020). Resulta crucial transparentar esta información crítica que respalda las decisiones adoptadas por la autoridad, que dichos datos estén respaldados científicamente y estén disponibles en formatos o lenguajes que todas las personas pudiesen comprender con facilidad (CEPAL, 2020).

Los casos de efervescencia social han sido la tónica en diversos países de la región, el contexto venía inestable desde antes de la pandemia; es cosa de recordar el estallido social en Chile el 2019, que derivó en un proceso constitucional, y la crisis en Ecuador también hace un par de años. En ese sentido, la aparición de la crisis sanitaria ha sido la llave para muchos gobernantes a la hora de profundizar el daño a valores democráticos. Basta señalar la gestión de Bukele, quien ya ha realizado múltiples violaciones constitucionales y que, según el periodista salvadoreño Gabriel Labrador, se ha caracterizado por la poca transparencia, escaso respeto a los DD.HH. y graves indicios de corrupción (Rojas, 2021). En países donde la rendición de cuenta es más consolidada, como Francia y Estados Unidos, las fuerzas armadas han restringido sus tareas a misiones de corte logístico, como la construcción de hospitales y la distribución de insumos médicos; en contraste, en países como Chile, Bolivia, Ecuador, Honduras, Guatemala y el mismo Salvador, los militares han actuado en misiones que suelen ser problemáticas para la democracia y vulneran los derechos humanos de las clases populares: la participación en la gestión de la crisis sanitaria y el mantenimiento del orden público

(Medeiros, 2021). En el artículo publicado **“Militarización en América Latina en tiempos de Covid-19”** de Anais Medeiros, se remarca que la referencia a un Estado de excepción puede facilitar la implementación de estas medidas autoritarias vigentes, como es el caso de la suspensión de derechos políticos, bajo la justificación de la necesidad del mantenimiento del orden en un contexto de excepción y de inseguridad sobre el futuro; permitiendo, algunas veces, que los militares actúen prácticamente sin contrapeso o control externo de sus actividades (2021). Consideramos clave garantizar procesos electorales democráticos e impedir que estas medidas destinadas a evitar la propagación terminen restringiendo el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos (CEPAL, 2020).

Más que demostrado quedan las gestiones deficientes y acciones que han socavado la credibilidad de la sociedad civil para con sus instituciones. Pero no solamente tenemos presidentes que se han aprovechado de esta emergencia para fomentar prácticas anti democráticas, sino que también gobernantes que han sido negacionistas y que han afectado de manera grave el manejo de la pandemia. Se viene de manera inmediata el caso de AMLO y, en especial, el de Bolsonaro en Brasil, quien ha minimizado durante mucho tiempo la ferocidad de la pandemia, al tiempo que ha resistido a las medidas de confinamiento y al uso de mascarillas, siendo acusado de amenazar a gobernadores y alcaldes que aplicaron medidas restrictivas (Pedroso & Reverdosa, 2021).

La Covid-19 es una llamada de alerta para reformar y cambiar el estatus quo de manera que podamos llegar, no a la vieja normalidad, sino a una nueva y mejor normalidad (BID, 2021). Bajo la clave de la integración regional que inspira este ensayo, se considera primordial establecer principios de gestión a nivel continental y tener un ferreo juicio ante gobernantes que perjudiquen la democracia y la salud de sus ciudadanos. Es imprescindible que los líderes políticos de la región trabajen de forma colectiva para encontrar soluciones conjuntas, partiendo del reconocimiento de que *“lo de siempre”* será diferente y de que habrá que dejar de lado muchas convicciones anteriores (CEPAL, 2020). En este proceso, la

solidaridad regional e internacional será fundamental para reconstruir mejor, con base de valores comunes y responsabilidad compartidas a favor de un progreso para todos (CEPAL, 2020). Y es que hoy más que nunca compartimos un montón de problemáticas; la inmigración, la economía global, la mencionada inestabilidad democrática y la gran crisis ambiental, son factores que confluyen también en este marco sanitario, exigiendo una respuesta conjunta que contribuya a fortalecer la economía y los obstáculos sociales de América Latina y el Caribe, ya que una respuesta individual sólo traería una solución parcial y no integral. Es por lo mismo que estos mínimos comunes se deben organizar de forma soberana por distintos medios, según la cultura institucional y las prácticas y valores democráticos que han orientado y dado sentido al quehacer de la ciudadanía, las organizaciones sociales y políticas, el Gobierno, los parlamentos y los tribunales, entre otros, de cada país (CEPAL, 2020).

El desafío Sanitario

La pandemia del Covid-19 ha traído graves períodos de estrés para el mundo y en especial para América Latina y el Caribe. El virus ha golpeado de manera profunda a los diversos países de la región, principalmente por malos manejos y condiciones pre existentes que dificultan su control. En promedio, a inicios de 2020, los países tardaron 9 días en tomar las medidas de distanciamiento, aconsejadas por la OMS, después del primer caso de contagio, lo que se consideró una reacción rápida (Paz-Noguera, 2020). Aunque hubo situaciones especiales, en donde algunos gobernantes demoraron un poco más y fueron mas resistentes en la aplicación de medidas; por ejemplo, el caso de Jair Bolsonaro, quien se ha caracterizado por ser negacionista. Basta recordar la lamentable situación del Estado de Amazonas, donde los hospitales estuvieron mucho más allá de su capacidad (Pedroso & Reverdosa, 2021).

El protocolo inicial que han seguido la mayoría de los países de América Latina y el mundo para detener el contagio no es nuevo, se basa en el modelo no farmacéutico

de salud pública que le permitió a la OMS contener el SARS a inicios del presente siglo (Paz-Noguera, 2020). Sin embargo, el éxito o no de este tipo de medidas como la cuarentena o restricciones de movilidad, especialmente las menos drásticas, depende de la capacidad de los sistemas sanitarios de los países para detectar los casos con pruebas masivas y aislarlos, tal como lo demuestran Corea del Sur y Singapur (Pueyo, 2020). Sumado a la complicación económica que conllevan este tipo de confinamientos, con consecuencias en el empleo y las producción (BID, 2021), estas políticas variaron en su efectividad alrededor de todo el mundo; en la región estas no fueron consistentes y no detuvieron un escenario que estuvo constantemente en estrés. Entre las explicaciones potenciales de este impacto desproporcionado están los altos niveles de urbanización y la densidad demográfica, la informalidad, la mala infraestructura sanitaria, la escasa vigilancia en el cumplimiento del confinamiento y posiciones fiscales débiles al comienzo de la crisis (BID, 2021).

La poca capacidad de testeo y los débiles programas de seguimiento en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, son explicaciones sanitarias para la mala gestión y los números catastróficos. Ocupando los datos de la Universidad Johns Hopkins, se realiza una pequeña tabla comparativa que nos permitirá diferenciar países de la región con otras naciones desarrolladas que sí han tenido un buen manejo de la pandemia.

Tabla 1:

Número de casos, muertos y habitantes (Covid-19) al 26 de mayor del 2021

Países	Casos	Muertos	Habitantes
Brasil	16.274.695	454.429	212.897.000
Argentina	3.622.135	75.588	45.809.000
Colombia	3.294.101	86.180	51.049.000
México	2.399.790	221.960	127.950.000
Perú	1.932.255	68.470	33.035.000
Chile	1.344.618	28.624	19.679.000
Canadá	1.374.022	25.300	38.247.000
Corea del Sur	137.682	1.940	51.722.000
Japón	731.071	12.572	125.254.000
Australia	30.048	910	25.976.000

Nota: Elaboración propia a partir de los datos de la Universidad Jonhs Hopkins (2021)

Asumiendo como sesgo que el porcentaje de testeo, a excepción de Chile, es tremendamente bajo en los países de la región (provocando números que lo más probable estén muy por debajo de los reales), de manera significativa se denotan diferencias con países con la misma población, pero con manejos excepcionalmente positivos ante la crisis sanitaria. Por ejemplo, el caso entre Colombia y Corea del Sur, que teniendo casi el mismo número de habitantes presentan situaciones muy dispares en cuanto a su situación pandémica (3.294.101 casos vs 137.682 casos); al igual que la comparación que se podría hacer entre Chile y Australia (1.344.618 casos vs 30.048 casos), con incluso menos habitantes por parte del primero; o también lo observable entre México y Japón (2.399.790 casos vs 731.000 casos) con prácticamente la misma población. Lo importante a discutir es qué estamos haciendo mal o qué condiciones tenemos que han permitido al virus crecer en esta parte del mundo, a diferencia de otros Estados, quienes han podido superar o contener de forma exitosa al Covid-19.

La vacuna aparece como una pequeña luz de esperanza, sin embargo, a excepción de Chile, los países de América Latina y el Caribe están muy lejos de alcanzar la apreciada *"inmunidad de rebaño"* que permitiría combatir la mortalidad del virus. La logística para vacunar a un gran porcentaje de la población es enorme, por lo que se tardara un tiempo considerable en inocular a las suficientes personas y así frenar la propagación de la enfermedad; sumado al temor del surgimiento de mutaciones más contagiosa y resistentes a las nuevas vacunas (BID, 2021). Es importante impulsar una política regional de inoculación que permita entregar más vacunas a ciertos países de la región que se han visto complicados en sus adquisiciones, ya que el correr con *"colores propios"* sólo traería la posibilidad de que otras poblaciones vecinas caigan en una crisis mayor y puedan generar mutaciones que terminarían afectando la tan anhelada inmunidad. Sahd, Rojas y Fernández señalan que la pandemia ha impuesto el concepto del *"salvese quien pueda"* antes que un sentido de responsabilidad regional, provocando, al no existir voces coordinadas, una parálisis de la integración que pone en riesgo a América Latina de tornarse irrelevante para el mundo (Sahd, Rojas, & Fernandez, 2021).

La coordinación y la iniciativa de empezar a construir protocolos y programas de intervención en conjunto, poniéndose a tono con la actual globalización y la importancia de ser un actor colectivo trascendente a nivel internacional, es fundamental. Para hacer frente a esta crisis sanitaria y sus graves efectos se necesitarán estos pactos políticos y sociales, los cuales tienen que construirse con la participación de una amplia variedad de actores, que permita universalizar la protección en salud y, sobre todo, reorientar el desarrollo sobre la base de la igualdad y las políticas fiscales, industriales y ambientales para la sostenibilidad (CEPAL, 2020). En línea con lo planteado por el informe de CEPAL (2020), los pactos, y la integración regional propuesta, deberán tener por objeto sentar las bases para construir un Estado de bienestar que, entre otros objetivos, asegure un acceso universal a la salud y una mejor prestación de bienes y servicios públicos, además de una diversificación de la inversión privada y pública.

Conclusión

La situación en América Latina y el Caribe es crítica, sus sistemas sanitarios y económicos han quedado colapsados, sumado a una inestable situación de sus instituciones. En función de esto, es que se plantea este ensayo, como un llamado a la colaboración interregional, la cuál es la única llave para superar la pandemia de forma colectiva. El fortalecimiento del Estado, así como el rol del sector público, deben ser un medio para abrir caminos institucionales destinados a lograr una mayor inclusión social (CEPAL, 2020), aquello tiene que generarse a través de un acuerdo tácito que involucre a todos los países del continente.

Los problemas económicos son variados: Los puestos laborales perdidos, la insuficiencia de los paquetes de ayuda (a diferencia de los Estados desarrollados), la alta carga fiscal de los gobiernos, la informalidad, los países extremadamente frágiles de la región, los obstáculos para el funcionamiento de los servicios locales o la actividad comercial detenida, son factores que necesitan una respuesta en conjunto. A través del documento se han dejado algunas alternativas posibles de

solución: El aumento de impuestos en función de una mejor redistribución en los servicios esenciales, la reducción de la informalidad (más impuestos y mayor protección social), fortalecer el lazo Estado-privado-sociedad civil, la importante solidaridad interregional, el cambio de modelo de desarrollo (reconocimiento universalismos) y el fortalecimiento de la región frente al mundo.

Lo institucional no se queda atrás, teniendo sus propias dificultades: Medidas de contención deslegitimadas, distancia entre Estado y sociedad civil, problemas de información confiable, medidas que afectan directamente a la democracia o malos manejos sanitarios desde el negacionismo. Asimismo, se propone en los párrafos anteriores algunos arreglos posibles: Transparentar la información crítica, llegar a una “nueva normalidad” y cuestionar el estatus quo existente, establecer principios de gestión a nivel regional (salud y democracia como focos), valores comunes y una cultura institucional renovada.

El desafío sanitario deja como obstáculos los siguientes temas: Casos de negacionismo (afectando la gestión), efectividad de las medidas impuestas, las condiciones de urbanización y densidad demográfica, la mala infraestructura sanitaria, la escasa vigilancia en el cumplimiento de los confinamientos o los malos números en comparación a países desarrollados con la misma población. Se propone esta batería de ideas: Solidarizar y coordinar apoyo en los procesos de inoculación, imponer la responsabilidad regional, construir protocolos y programas en común, reorientar la política sanitaria con una amplia variedad de actores e impulsar el acceso universal.

En síntesis, en América Latina y el Caribe se necesita una acción política transformadora que sirva de guía y ofrezca certeza y orientación para salir de esta crisis (CEPAL, 2020). La coordinación interregional es clave, desde todas las áreas que han sido afectadas por la pandemia se necesita colaboración. Construir un espacio de discusión y en donde se puedan producir realmente posibilidades de apoyo mutuo, es primordial. Estas instancias de diálogo serán relevantes para

enfrentar la pandemia, principalmente por establecer esa capacidad de consenso en torno a la información epidemiológica, migración y fronteras, acceso a créditos internacionales, libre tránsito de bienes y compras conjuntas de insumos médicos (Sahd, Rojas, & Fernandez, 2021).

Bibliografía

ACNUDH. (2020). *La COVID-19 y sus dimensiones de derechos humanos*. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ginebra: ACNUDH.

- (2011). *Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar"*. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ginebra: ACNUDH.

BID. (2021). *Oportunidades para un mayor crecimiento sostenible tras la pandemia*. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo.

CEPAL. (2020). *Pactos políticos y sociales para la igualdad y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe en la recuperación pos-Covid-19*. Santiago: CEPAL.

- (2020b). *El desafío social en tiempos del COVID-19*. Santiago: CEPAL.
- (2019). *Nudos críticos del desarrollo social inclusivo en América Latina y el Caribe: antecedentes para una agenda regional*. Santiago: CEPAL.

CIDH. (2020). *Pandemia y derechos humanos en las Américas*. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Washington: CIDH.

La liga contra el Silencio. (17 de abril de 2020). *Centinela COVID-19: Gobiernos de América Latina y sus respuestas a la pandemia*. Obtenido de La liga contra el Silencio: <https://ligacontraelsilencio.com/2020/04/17/centinela-covid-19-gobiernos-de-america-latina-y-sus-respuestas-a-la-epidemia/>

Medeiros, A. (4 de Febrero de 2021). *Militarización en América Latina en tiempos de Covid-19*. Obtenido de CIPER: <https://www.ciperchile.cl/2021/02/04/militarizacion-en-america-latina-en-tiempos-de-covid-19/>

OIT. (2018). *Mujeres y hombres en la economía informal: un panorama estadístico*. Ginebra: OIT.

Paz-Noguera, B. (2020). Tendencias de los diseños de políticas públicas sanitarias para la pandemia Covid-19 en América Latina. *Universidad y salud. Suplemento 1: Especial Covid-19*, 22(3), 327-339.

Pedroso, R., & Reverdosa, M. (28 de Abril de 2021). *Jair Bolsonaro enfrenta una investigación del Senado de Brasil sobre su manejo del covid-19*. Obtenido de CNN Español: <https://cnnespanol.cnn.com/2021/04/28/jair-bolsonaro-investigacion-manejo-covid-trax/>

Pueyo, T. (19 de Marzo de 2020). *Coronavirus: The Hammer and the Dance*. Obtenido de Medium: <https://tomaspueyo.medium.com/coronavirus-the-hammer-and-the-dance-be9337092b56>

Rojas, F. (8 de Mayo de 2021). *Nayib Bukele: El outsider devenido en autócrata*. Obtenido de La Tercera: <https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/nayib-bukele-el-outsider-devenido-en-autocrata/7QEUTCXI5FGVXEBX7V32UXVYQU/>

Sahd, J., Rojas, D., & Fernandez, M. (2021). *Riesgo Político América Latina*. CEIUC. Santiago: CEIUC.

Universidad Johns Hopkins. (26 de Mayo de 2021). *Data Visualizations: Global Map*. Obtenido de Coronavirus Resource Center: <https://coronavirus.jhu.edu/map.html>